

Medellín, diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	EJECUTIVO
Radicado	05001 31 03 015 2013 00576 01
Ejecutante	SUPLITEX S.A.
Ejecutado	LUZ ADRIANA HIGUITA IBARRA
Juzgado Origen	SEGUNDO CIVIL CIRCUITO EJECUCIÓN SENTENCIAS MEDELLÍN

Decide la Sala la apelación interpuesta frente al auto del 13 de julio de 2023, mediante el cual se declaró la terminación del proceso por desistimiento tácito del proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES.

El 13 de julio de 2023, el Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Medellín, declaró la terminación del proceso por desistimiento tácito, bajo la premisa de que el proceso permaneció inactivo desde el 30 de enero de 2020, sin que el ejecutante desplegara actuación alguna.

2. LA IMPUGNACIÓN.

A través de memorial del 21 de julio de 2023, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto que finalizó el proceso.

Argumentó que el despacho censurado no cumplió con requerimiento previo a la parte por el término de treinta días para que cumpliera con la carga procesal de impulsar el proceso, ni existía carga procesal alguna, por luego, no había lugar a decretar el desistimiento tácito.

La reposición fue despachada desfavorablemente mediante auto 14 de agosto de 2023 y se concedió el recurso de alzada. El *a quo* consideró que la concreción de medidas de embargo sobre bienes que permitan consumir la sentencia fue lo que conllevó a terminar el proceso por desistimiento tácito, teniendo en cuenta que, desde la última actuación del 30 de enero de 2020, en donde se incorporó una dependencia judicial, no advertía solicitud tendiente a la materialización de la sentencia, esto es, que no había solicitud de oficiar a la EPS para indagar el empleador de la ejecutada y así proceder con el embargo de su salario, tampoco actualización del crédito o las costas, lo cual le competen a la parte interesada, dado que el proceso está en etapa de ejecución y que, como el proceso permaneció inactivo por más de 2 años, se cumplían así los parámetros del artículo 317 para terminarlo, razones por las cuales mantuvo incólume la decisión, concedió la alzada y remitió el expediente a esta Corporación para decidir lo pertinente.

3. CONSIDERACIONES.

3.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del CGP, el recurso de apelación contra autos procede únicamente contra aquellos que la misma norma relaciona de manera taxativa o en aquellos casos contemplados en disposiciones especiales, como en el caso bajo estudio, donde se contempla el recurso de apelación en el literal e) del numeral 2 del artículo 317.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Le corresponde a la Sala determinar si había lugar al desistimiento tácito del proceso, por haber transcurrido el término de dos años sin actividad procesal, con fundamentó en el numeral 2 del artículo 317 del CGP.

3.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

El Código General del Proceso consagra, entre varias hipótesis, la facultad para que, en procura de la continuidad del trámite del proceso, el juez declare desistida tácitamente la actuación y termine el proceso:

"ARTÍCULO 317. DESISTIMIENTO TÁCITO. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.

...

2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes.

El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:

...

b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años;

c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo; ...”

La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, se pronunció respecto de esta causal y específicamente en cuanto a la suspensión del término y explicó que la expresión “*cualquier actuación*” no se debe interpretar en su literalidad, sino de manera sistemática y por ello la actuación desplegada para que interrumpa el término previsto en la norma es aquella que guarde relación con la carga requerida o que sea suficiente, idónea y apropiada para el impulso del trámite, así se le da sentido útil y eficaz a la directriz¹.

En el mismo sentido, la Corte ha precisado cuáles son las actuaciones que se consideran relevantes y dan lugar a la “*interrupción*” del término indicado en los procesos ejecutivos, cuando exista sentencia o auto que ordena seguir adelante con la ejecución:

“... se logra únicamente con actuaciones tendientes a la obtención del pago de la obligación o actos encaminados a lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor, a fin de rematarlos y satisfacer el crédito perseguido.”²

Por otro lado, la doctrina ha ilustrado la diferencia existente entre las disposiciones de los numerales 1 y 2 del artículo 317 de Código General del Proceso. Así, en aplicación de su deber de dirigir el proceso y velar por su rápida solución e impedir dilaciones, el juez sin consideración del tiempo transcurrido requerirá a la parte para que cumpla con la carga procesal que le corresponde, so pena de declarar desistida la actuación. Mientras que, la segunda modalidad, es decir la contemplada en el numeral 2, es de aplicación en aquellos eventos en los cuales el proceso se encuentra paralizado en secretaría por más de un año, o dos años si cuenta con sentencia u orden de seguir adelante la ejecución, en cuyo caso, la autoridad judicial puede decretar, sin previo requerimiento, la terminación del proceso por desistimiento tácito, debiéndose constatar, tan solo la ausencia de actuación³.

¹ Ver STC11191 de 2020 Radicado 11001-22-03-000-01444-01 M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.

² Ver STC1216 de 2022 radicado 08001-22-13-000-2021-00893-01 M.P MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ.

³ Código general del proceso. Parte general, Hernan Fabio López Blanco: “... lo primero que observo frente a la norma en cita, es que contribuye a la regulación de destacadas consecuencias, prescribir que la paralización de un proceso en la secretaría del juzgado por lapso superior a un año, permite declarar de oficio o a petición de parte, la terminación del mismo por desistimiento, sin necesidad de que se cumpla ningún otro requisito adicional al de la constatación objetiva de que estuvo en secretaría

3.4 CASO EN CONCRETO.

Del examen del expediente, se constató que el proceso cuenta con auto que ordenó seguir adelante la ejecución el 9 de mayo de 2017; que por auto del 23 de junio de 2017 se aprobó la liquidación de costas y, el 5 de febrero de 2018 el Juzgado de Ejecución avocó conocimiento del proceso ejecutivo y, que desde esta última fecha hasta la que dio por terminado el proceso, el demandante no realizó ninguna gestión para impulsar el proceso, pues sus últimas actuaciones consistieron en informar en la designación de dependientes judiciales los días 30 de mayo, 28 de septiembre de 2017, 12 de abril de 2018 y 17 de julio de 2019, las cuales fueron incorporadas mediante constancia secretarial del 30 de enero de 2020.

En este caso, el apelante reprocha que el Juzgado, pese a la inactividad del proceso por más de dos años, hubiese decretado su terminación sin haber efectuado previamente el requerimiento por treinta días, de que trata el numeral 1 del artículo 317, para que impulsara la causa. Sin embargo, tal interpretación del demandante es errada, pues, como se decanta de los hechos probados y del fundamento expuesto, no hubo yerro por parte del *a quo* al optar por la vía del numeral segundo de la norma en cita.

Así, las hipótesis son: i) cuando el trámite del proceso pende de una carga procesal de parte, el juzgado está en la obligación de requerir a la parte y brindarle la oportunidad para que la cumpla dentro de los 30 días siguientes; ii) cuando no hay carga de parte y el proceso está en Secretaría sin sentencia e inactivo por más de un año y; iii) cuando permanece en Secretaría, con sentencia e inactivo por más de dos años. Entonces, cuando se configura alguno de tales escenarios, habrá lugar a la terminación de la correspondiente actuación o del proceso, advirtiendo que, en cualquiera de dichos casos, los términos legales son susceptibles de interrupción si se realiza una actuación apta y apropiada para "*«impulsar el proceso» hacia su finalidad*".

En ese sentido se cumplieron los presupuestos fácticos, para que el juez de primera instancia optara por la última hipótesis y no por la del numeral 1 del artículo 317 del CGP. Así las cosas, el proceso permaneció inactivo más de dos años en la secretaría del despacho, después de que este avocara conocimiento por auto del 5 de febrero de 2018, contando ya con auto que ordenó continuar la ejecución, sin que se solicitara ni se realizara ninguna actuación durante ese plazo, tales como, concretar nuevas medidas cautelares, solicitar la entrega de los dineros, liquidar y actualizar el crédito. Por lo que mal pudiera endilgarse al despacho censurado la responsabilidad de impulsar el proceso, requiriendo al apelante, cuando

ininterrumpidamente por dicho lapso, y , lo más importante, no es necesario buscar responsables de la paralización ni achacar la misma a incumplimiento del juez de su deber de adelantar el proceso, porque se admitió que en las actuales condiciones al juez le resulta físicamente imposible controlar todos los procesos en curso y tiene el demandante la carga de supervigilar su adelantamiento e impedir la parálisis del mismo."

este dejó transcurrir un lapso tan amplio sin mostrar interés alguno en la solución de la ejecución, motivos suficientes para confirmar la decisión cuestionada.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

4. RESUELVE.

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia apelada, fechada del 13 de julio de 2023, dentro del proceso de la referencia.

SEGUNDO: ORDENAR la devolución del expediente al juzgado de origen, sin condena en costas.

NOTIFÍQUESE



JULIO NÉSTOR ECHEVERRY ARIAS
Magistrado